



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO COMO REGLA GENERAL Y HERRAMIENTA DE CONGESTIÓN JUDICIAL

Presentado por:

JOSÉ ALEJANDRO QUINTERO RESTREPO¹
ÓSCAR EDUARDO SALAZAR MARTÍNEZ²
JUAN FELIPE TRUJILLO SOTO³

RESUMEN:

Es pertinente el presente ensayo reflexivo, porque su objetivo principal es brindar a la comunidad jurídica, tanto de estudiantes como docentes y profesionales que se desempeñen en las diferentes entidades de la administración pública, otra óptica frente a la figura del silencio administrativo en su acepción negativa como regla general en el ordenamiento jurídico colombiano.

Desde su creación, la figura del silencio administrativo en el derecho público colombiano tuvo gran acogida, toda vez que, le permitió al ciudadano de a pie tener una pronta respuesta, al menos de manera virtual, a las peticiones que podía llegar a demandar frente a la administración

¹ Abogado de la Universidad Libre, vinculado a la PONAL.

² Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, escribiente de juzgado civil municipal

³ Abogado de la Universidad Libre, Especialista en Derecho laboral y Seguridad social de la Universidad del Rosario, Contratista de la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas, Estudiante de especialización en Derecho Administrativo



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

pública. Ello bajo la concepción del Estado de Derecho de la Constitución de 1886 y el CCA (Decreto 01/84), donde no existía mecanismo alguno de protección jurídica, frente a la omisión de respuesta por parte de la administración.

No obstante lo anterior, hoy por hoy, con la entrada en vigencia de una nueva constitución de índole garantista, existen recursos constitucionales para la protección de este derecho, que relegan por inoperante la declaratoria de silencio en cualquiera de sus acepciones, y de suyo, tácitamente lo convierten en un arcaísmo jurídico que no hace otra cosa que eternizar la protección de derechos de los ciudadanos.

De esta misma condición padece la otra figura de silencio administrativo, como lo es el de carácter positivo, el cual como herramienta de protección al ciudadano es de escasa aplicación por su índole excepcional, extraordinario y especial, alejado en ocasiones del posible ejercicio del ciudadano que busca la protección de su derecho de petición.

En suma, lo que propone el establecimiento del silencio administrativo positivo como regla general es que permitirá, además de la realización y garantía efectiva y eficaz de los principios y fines de la actuación administrativa; la descongestión judicial y el cumplimiento efectivo de los núcleos duros del derecho de petición constitucional.

PALABRAS CLAVE: Derecho de petición, silencio administrativo, administración de justicia, protección constitucional, garantías constitucionales.



ABSTRACT:

The present reflexive essay is pertinent, because its main objective is to provide the legal community, both students and teachers and professionals who work in the different entities of the public administration, with another view of the figure of administrative silence in its negative meaning as a general rule in the Colombian legal system.

Since its creation, the figure of administrative silence in Colombian public law was very well received, since it allowed the ordinary citizen to have a prompt response, at least virtually, to the petitions that he could sue in front of the public administration. This under the conception of the Rule of Law of the Constitution of 1886 and the CCA (Decree 01/84), where there was no mechanism of legal protection, against the omission of response by the administration.

Notwithstanding the above, today, with the entry into force of a new constitution of a guarantee nature, there are constitutional remedies for the protection of this right, which relegate as inoperative the declaration of silence in any of its meanings, and of itself, tacitly make it a legal archaism that does nothing but perpetuate the protection of citizens' rights.

Of this same condition suffers the other figure of administrative silence, as it is the positive character, which as a tool of protection to the citizen is of little application because of its exceptional, extraordinary and



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

special nature, sometimes removed from the possible exercise of the citizen who seeks the protection of your right of petition.

In short, what proposes the establishment of positive administrative silence as a general rule is that it will allow, in addition to the realization and effective and effective guarantee of the principles and purposes of administrative action; the judicial decongestion and the effective fulfillment of the hard core of the right of constitutional petition.

KEYWORDS:

Right of petition, administrative silence, administration of justice, constitutional protection, constitutional guarantees.

INTRODUCCIÓN:

Con la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991, que consagró derechos fundamentales de la persona humana, como mecanismos de protección de estos, creó una serie de mecanismos de protección encaminados al respeto de los mismos. (Con la entrada en vigencia de la Carta de 1991, la cual trajo consigo una amalgama de derechos fundamentales de categoría constitucional para las personas, también adosó una serie de mecanismos de protección casi inmediata, frente a una categoría de derechos para que los mismos fueren respetados por las autoridades de la república, e incluso por los particulares).



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

En ese orden de ideas, apareció constitucionalizada la protección del derecho fundamental de petición como garantía constitucional a obtener respuesta: *“de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable”* (Corte Constitucional, 2013) por parte de la administración pública; la cual, debería ser resuelta en el término que de ley fuere procedente *so pena* de la procedencia de la acción de tutela para la protección de este derecho.

No obstante lo anterior, otro es el escenario de la figura de la contestación del derecho de petición, según el ordenamiento jurídico colombiano, máxime en lo que se refiere al procedimiento administrativo, otro es el mecanismo de protección frente a esta inactividad de la administración con implicaciones a derechos fundamentales. Tal mecanismo es llamado silencio administrativo, erigido como “la institución por la cual el ciudadano defiende sus intereses frente a la inactividad de la administración pública” (Aguilar, Correa, Puentes, Quintero, & Verastegui, 2011).

En tal sentido, sería en principio el silencio administrativo la figura y mecanismo mediante el cual el ciudadano buscaría la protección y respuesta pronta de su derecho; al considerar, prima facie, que la respuesta a la petición es virtualmente negativa solo por el paso del tiempo, y excepcionalmente positiva tras el paso del tiempo y la respectiva protocolización del mismo. Es decir, se incluyen una serie de requisitos al interior de lo que es conocido como vía administrativa; para que luego pueda proceder la acción procesal constitucional de tutela, como el medio idóneo (luego de agotada la vía administrativa sin conseguir una debida respuesta) para poder hacer valer tal derecho de una forma ya no tan expedita como en principio fue creado.



Así, siendo esta una figura creada para ser un control y conjuro contra la inactividad de la administración, se ve reemplazada por un mecanismo más expedito y práctico, así como de mayor acceso para los ciudadanos por su posibilidad de interposición por cualquier persona, como lo es la acción de tutela.

Colofón de lo expuesto, se pretendió realizar una exposición histórica de la figura del silencio y su poca practicidad para el Estado Social y Democrático de Derecho para al final, realizar una propuesta teórica y solución al respecto

DESARROLLO METODOLOGICO

Para el desarrollo del ensayo reflexivo, se propuso la siguiente estructura metodológica: Se presentó una investigación de carácter socio-jurídica, lo que constituyó un ejercicio de análisis de las normas de derecho constitucional al igual que la jurisprudencia y las normas de derecho administrativo que permiten dar respuesta a la pregunta de investigación i) El Método de investigación seleccionado fue de carácter descriptivo no experimental transversal, el cual tuvo como objetivo indagar sobre la naturaleza jurídica y la implicación constitucional de la figura del silencio administrativo tenida como institución arcaica en materia de derecho administrativo. Y; ii) Las fuentes, técnicas e Instrumentos para desarrollar el documento fueron: las jurisprudencias de la Corte Constitucional, al igual que libros, monografías, disertaciones, documentos oficiales, Textos,



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

documentos y artículos referentes al tema que permitieron analizar y dar respuesta la hipótesis de la investigación.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Exponer que la figura del silencio administrativo es una institución arcaica y que no garantiza los derechos de las personas en tanto, (i) requiere un tiempo bastante amplio para que se considere la decisión negativa y de suyo, poder agotar la vía administrativa o acudir a la jurisdiccional, (ii) si se considera positivo requiere además este paso del tiempo, cumplir con un procedimiento adicional como el ser elevado a escritura pública; (iii) no satisface la pronta respuesta de la petición incoada por el ciudadano por el hecho de tenerse como una respuesta presunta y; (iv) se posee una mejor herramienta para protección de los derechos. Como por ejemplo la tutela o la acción de cumplimiento, ambas de índole constitucional.

En ese orden de ideas, el silencio administrativo es una figura de ya poco uso y monta en el desarrollo del Estado social y democrático de derecho que, por la actualización jurídica, ha dejado de lado tal mecanismo protección por poco eficiente y porque impone la prevalencia del derecho procesal frente al sustancial, a la hora de dar un acceso efectivo a un derecho fundamental mediante un procedimiento lento y engorroso para el ciudadano de a pie; es decir, violentando uno de los principios constitucionales que deberá ser respetado y acatado por todo funcionario público, como lo es el de la aplicación del derecho sustancial y su prevalencia, sobre el procedimental y que el mismo se encuentra demarcado



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

considerablemente en el Artículo 228 de la Constitución Nacional. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991)

Por lo anterior se presenta el siguiente planteamiento a resolver:

¿Podría el silencio administrativo positivo, convertido en regla general de aplicación, garantizar la protección constitucional al derecho de petición, los fines de la función administrativa y evitar la congestión administrativa y judicial?

OBJETIVOS

- Objetivo General.

Determinar si el silencio administrativo positivo como regla general, sería la herramienta más expedita para garantizar la protección constitucional al derecho de petición y evitar la congestión administrativa y judicial y la materialización de los fines de la función administrativa.

- Objetivos Específicos
 - ✓ Exponer brevemente la historia de la figura del silencio administrativo en el derecho administrativo.
 - ✓ Definir como el silencio administrativo es violatorio de los principios de la función pública.
 - ✓ Determinar por qué la acción de tutela es el mecanismo más expedito para la protección del derecho fundamental de petición



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

- ✓ Exponer por qué la figura del silencio negativo eterniza y congestiona el aparato judicial.
- ✓ Proponer cómo el silencio administrativo de carácter positivo como regla general sería la figura expedita para evitar congestión judicial y posibilitar la materialización de los fines de la función administrativa.

1. De la historia del silencio administrativo en Colombia.

La figura del silencio administrativo surge en la historia como aquella mediante la cual, se da respuesta al silencio e inacción de la administración a la hora de dar efectivo cumplimiento a sus funciones; es decir, la respuesta o presunción de respuesta cuando en un procedimiento o solicitud de inicio de procedimiento, la administración pública se muestra trivial.

El silencio administrativo entendido como la respuesta virtual que sucede con el paso del tiempo para la toma de decisiones previsto por el legislador y como máximo para la toma de una decisión, es aquel que conjura una situación en la que la administración “habla callando” (Gonzalez J. , 1985).

En tal orden de ideas, su surgimiento se da como excepción a la regla de que todo acto conste por escrito (Huerta F. , 2008), siendo esta una forma de exteriorización de voluntad de la administración pública a la hora de la toma de decisiones que a sus supeditados afecte.

La figura del silencio ha de buscar dar solución a lo insoluto y ser una garantía para el administrado de respuesta a las peticiones que este incoe



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

en ante la autoridad; buscando pues la posibilidad de tener el mismo administrado la posibilidad de acudir a la administración de justicia a controlar un acto virtual que, si bien se presume existente, se da y es una mera interpretación de una inactividad administrativa.

Será entonces pues una figura que “surge concomitantemente con la necesidad de una respuesta previa por parte de la administración, y existe como institución jurídica en los estados en los que se establece como presupuesto de la acción el agotamiento de la vía administrativa o gubernativa” (Huerta L. , 2004). Así, será pues una respuesta a la indefensión en la que pueden quedar los administrados a la hora de impetrar solicitudes a la administración en aras de poder acudir a un medio de control judicial, como presupuesto para acudir a la vía judicial en el entendido en que, sin acto administrativo no puede darse proceso contencioso administrativo.

Por lo tanto, por la vía de la conjetura se obtiene la decisión de la administración cuando esta ha omitido el deber constitucional y legal de responder las peticiones y recursos que los administrados efectúan (Huerta F. , 2008). Así, la figura del silencio administrativo ha sido de arduo estudio en el derecho público colombiano; resumiendo el estudio de este a tres variables esenciales de las que se dilucida la discusión, tales como: (i) cómo hacer para que la administración actúe a tiempo; (ii) cómo proteger los derechos de las personas afectadas con la inactividad y; (iii) si debe o no el juez administrativo remplazar a la administración a la hora de tomar decisiones de fondo que terminen una actuación administrativa. (Arboleda Perdomo, 2012).



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

2. El silencio administrativo como violación directa de los principios de la función administrativa.

Como siempre fue afirmado por el autor Bobbio, la mayor problemática que han presentado los derechos humanos no es aquella de definirlos ni estudiarlos desde las ópticas axiológicas ni de ninguna otra teoría, sino, el de la forma más expedita y práctica de protegerlos (Bobbio, 1991).

De lo que ha sostenido con vehemencia Bobbio, también cobra sentido la existencia de las instituciones políticas como organización supraindividual (Moreno, 2000), materializadas todas ellas en la posibilidad de ejercitar el interés general en ocasiones coincidente con el interés particular de las personas; siendo pues, tal y como lo estableció Jellinek, el otorgamiento de pretensiones jurídicas a la actividad estatal y la puesta a disposición de la ciudadanía de remedios jurídicos realizar tal actividad. Es decir, la existencia de mecanismos jurídicos para la materialización de los fines esenciales del Estado que, de manera eficiente garanticen y protejan los derechos humanos (Jellinek, 1919).

En virtud de lo anterior, y habiendo expuesto ya el silencio administrativo a las luces del ordenamiento jurídico colombiano y su historia a lo largo y ancho de las codificaciones administrativas; es dable manifestar que, si bien esta figura permite dar solución a lo insoluto o dar una respuesta virtual cuando la inactividad de la función administrativa así lo obligue, debe decirse que, en un modelo de Estado como el de hoy, tal figura se hace inconcebible, aun cuando se predique, de parte incluso de la



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

doctrina o de las altas cortes colombianas como “(...) una garantía para el administrado y no para la administración” (Garzon, 2008).

El Artículo 209 constitucional, así como la normativa procedimental reglada en la parte primera de la ley 1437 de 2011, o CPACA, establece la principalística aplicable a todo procedimiento y actuación administrativa, sin perjuicio de las establecidas en normas especiales. Además de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y coordinación (como lo dice el art. 209), los del artículo 3º de la citada ley como los de buena fe, moralidad, participación, responsabilidad y transparencia, todos ellos en consonancia con las garantías mínimas constitucionales que la carta regla

En tal virtud, la mera existencia de una figura que permite o da respuesta a una situación con implicaciones en derecho ante una impávida e impertérrita omisión de la administración, es un sinsentido jurídico que, a la postre, mancilla todos los quereres y sentires del constituyente determinados en la principalística anteriormente mencionada.

Así pues, la figura del silencio vulnera el principio de legalidad por cuanto esta figura omisiva data de no cumplir con la carta o la ley procedimental a la luz de convertirla en inaplicable y vaga en el entendido en que no permite darle aplicación al marco jurídico que regla las relaciones.

También el principio del debido proceso constitucional, puesto que impide prima facie la garantía mínima de la respuesta oportuna a las peticiones y solicitudes de actuación de parte de la administración, que



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

conculcan de tal suerte un derecho fundamental, además de petición, el de contradicción, audiencia y defensa y todos los relativos al desarrollo de un procedimiento justo y en aplicación de la carta política.

En igual sentido, se verá vulnerado el principio de igualdad, en el entendido en que no se podrá predicar igualdad entre las personas que interponen peticiones respetuosas ante la administración o recursos, siendo uno de ellos resultas a contrario de otros que no lo son, vulnerando pues los principios de igualdad real e igualdad material.

También existe con la figura del silencio administrativo el principio de imparcialidad, puesto que tal mecanismo le impide asegurar y garantizar los principios y derechos de las personas que se persiguen con los procedimientos existentes, desconociendo en el mismo modo del principio anterior, los criterios de igualdad

La buena fe como garantía mínima esperada de parte la administración también se ve vilipendiada en el entendido en que el silencio de la administración no puede ser tenido como una actuación que presuma “(...) el comportamiento leal y fiel” de parte de la administración.

La moralidad, también se encuentra espuria frente a la inactividad de la administración, en tanto deja ver que esta no actúa a partir de rectitud, lealtad ni la honestidad en sus actuaciones

También la participación como principio es soslayado por la existencia de tal figura en tanto implica un sesgo en el ejercicio del derecho de acción



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

y libre acceso o concurrencia en cualquier tipo de proceso o actuación pública

El principio de responsabilidad, se ve afectado con la existencia de la figura por cuanto si bien ha de existir la obligación de resolver las peticiones y su repercusión por no hacerlo, esto implica de parte de la administración pública un desgaste interno a la hora de realizar procedimientos disciplinarios, de repetición o de cualquier índole.

A su vez, la transparencia se ve lacerada por la omisión administrativa de respuesta en tanto impide el conocimiento de la actuación de parte de la administración pública; siendo así mismo, una trasgresión del principio de publicidad por cuanto es imposible conocer o dar a conocer una respuesta ficta o virtual.

La coordinación también a verse quebrantada por la inactividad de la administración que omitió concentrar sus actividades con otras instancias estatales en aras del cumplimiento de sus fines, implicando de suyo la vulneración del principio de la eficacia puesto que las actividades de las de espera cumplimiento se ven inconclusas, implicando además de una falta de respuesta, la existencia e imposición de cargas a los usuarios evitables con una simple respuesta de fondo cuyo único y simple objeto sería abrir la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional (Berrocal, 2004).

Así mismo, el principio de economía y celeridad se tiene por soslayados en vigencia de la posibilidad de omisiones al ejercicio de las funciones de parte de la administración, por cuanto nada han de tener de



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

céleres y económicas situaciones se presentan y no son impulsados de parte de la administración.

Es en tal virtud, ha de entenderse la figura del silencio administrativo como un mecanismo vulnerador de los principios de la función pública en tanto lo que hacen es desnaturalizarla y a la postre, trasgrediendo el Estado Social de Derecho que se presume por el que las autoridades deben propender.

3. La acción de tutela como mecanismo expedito para la protección del derecho de petición.

Ya es bien consabido que la ocurrencia de un silencio administrativo se produce “cuando quiera que, formulada una petición a la administración con la observancia de los requisitos previstos en la ley, o cuando quiera que, interpuesto por el peticionario o por persona interesada en la actuación administrativa alguno de los recursos ordinarios señalados en la ley, la petición o el recurso no son decididos por la autoridad competente dentro del plazo legal para ello” (Gonzalez M. , 2007); sin embargo, es dable manifestar que la figura del silencio, si bien es “(...)una especie de sanción de sanción a la inercia administrativa”, es prima facie y en su sentido práctico la violación al derecho constitucional fundamental de petición contenido en la Carta Política en su Artículo 23.

Al ser pues un derecho constitucional fundamental, la Carta Política de 1991 estableció una serie de acciones procesales constitucionales encaminadas a



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

la protección especial de este tipo de derechos, tal como lo es la acción procesal constitucional de tutela.

Frente a la naturaleza de esta acción, la Corte Constitucional ha dicho que

La acción de tutela se define como un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley (Corte Constitucional, 2008)

En tal virtud, “la negación injustificada o la abstención del funcionario administrativo o judicial en su trámite constituyen una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, susceptible entonces, de ser amparado a través de la acción de tutela” (Daza, 2012).

Así pues, se tiene que la figura más expedita para la respuesta completa y pronta de la petición incoada a la administración pública será la acción procesal constitucional de tutela, por cuanto la implicación del silencio, más que ser una simple figura del ejercicio administrativo, es una figura con implicaciones a derechos constitucionales fundamentales. Al respecto, la Corte Constitucional fue enfática al manifestar:

“Este tribunal ha considerado que la acción de tutela es el mecanismo procedente para determinar la violación del derecho de petición. En esa dirección, la sentencia T-084 de 2015 sostuvo que “la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

otros derechos constitucionales”. De acuerdo con lo anterior, la Corte ha estimado “que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo” (Corte Constitucional, 2018)

Así pues, el silencio administrativo se ha de quedar corto como figura administrativa para la verdadera protección del derecho de petición toda vez que, por encima de este, encontramos la acción procesal constitucional de tutela que, contrario sensu a tener que aguantar de parte del administrado un procedimiento pertinaz para la obtención de respuesta; la acción de tutela efectiviza la petición a un tiempo de 10 días hábiles para la obtención de fallo. Es en tal virtud que será la tutela el mecanismo expedito para la consecución de respuesta.

4. El silencio negativo como regla general que se convierte en medio para eternizar y congestionar el aparato judicial.

A partir de lo ya dicho, el silencio administrativo como especie de castigo para la administración en mérito de un derecho de los ciudadanos a la obtención de respuesta a sus peticiones, ora de carácter positivo o negativo, debe decirse que su existencia, y más la regla de presunción de respuesta negativa como regla general, es un problema práctico a la hora de dar aplicación a las garantías mínimas constitucionales como lo son la de la obtención de una respuesta clara y en término de las peticiones que se incoen a la administración.



Todo ello en virtud a la congestión judicial que implica que cualquier persona que interponga una petición respetuosa a la autoridad, la misma que en el término que tiene para ello no toma la decisión al respecto y conduce al administrado a la interposición de la acción procesal constitucional de tutela para la protección del derecho de petición; acción que tiene trámite preferencial y preferente sobre todo proceso judicial y que a la postre, su acumulación por el mismo hecho, conlleva al represamiento no solo de las mismas acciones procesales sino también, de los procesos judiciales en sí mismos y a la eternización del aparato judicial que culmina en la percepción de la sociedad de ineficiente

5. El silencio administrativo positivo como regla general para evitar congestión judicial y posibilitar la materialización de los fines de la función administrativa.

En conducto y contrario pues a lo dicho en el acápite anterior, es de manifestar e iterar que la figura del silencio administrativo negativo como regla general es un desasosiego de carácter procesal en mérito de lo expuesto, por cuanto traslada las cargas públicas y procesales al peticionario a la hora de incoar peticiones ante la ineficiencia de las autoridades públicas y su fútil actuación y respuesta de los requerimientos sociales que terminan vulnerando los principios de la función administrativa.

No obstante lo anterior, existe otra modalidad de silencio administrativo que, en principio, si garantizaría el modelo de Estado que tiene Colombia, toda vez que, de aplicarse como regla general obligaría a las



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

autoridades públicas a dar contestación efectiva a todo requerimiento de la ciudadanía y a resolver cualquier eventualidad que se presentare so pena de operar, por su inanición, la respuesta positiva a la petición que se invocó ante la autoridad pública, siendo solo negativa en lo estrictamente reglado por la ley, in perjuicio de las faltas disciplinarias en las que habría de incurrir el funcionario en caso de que dejase operar el silencio

Es así pues como, la figura del silencio positivo permitiría la obtención y materialización de los principios de la función pública, por cuanto, su aplicación si garantizarías desde el debido proceso, hasta la celeridad de la actuación administrativa, en tanto una presunción de respuesta positiva a la hora de decidir, conllevaría a un derecho de audiencia y defensa garantizado con la expedición del acto que ha de decidir, un tratamiento leal y fiel de las partes; una actuación moral recta y honesta, así como participativa, responsable transparente publica, coordinada, eficaz económica y célere.

Adicional a esto, tal figura no solo tendría buenas repercusiones desde el ámbito procedimental y constitucional a la hora de buscar solución al derecho de petición incoado por parte del ciudadano, sino también, a la hora de la llevada a control judicial de los actos fictos o presuntos que hoy se demandan ante la jurisdicción, por cuanto, con una respuesta positiva presunta o con una obligatoriedad de responder, ya el ciudadano no se encuentra ni se conduce a tientas en la penumbra jurídica en aras de determinar cuál ha sido el vicio en que hubiese podido incurrir el acto ficto y por el cual, el mismo, debiere ser controlado.

Con la expedición ya de un acto expreso se podría dar a entender la voluntad de la administración y los vicios de los cuales pudiere adolecer el



Seccional Pereira

Especialización en Derecho Administrativo

acto sujeto de control; y no, contrario a como ocurre, a una aproximación que intenta ser lógica pero que, aun con agudeza mental de parte del litigante, sería imposible determinar el querer o sentir de la autoridad a la hora haber proferido en teoría respuesta de fondo para la petición incoada.

6. CONCLUSIONES

Aquí yace la crítica reflexiva que demanda el texto, en razón a que es la figura del silencio administrativo una pieza de derecho administrativo ya arcaica, y que ha debido ser actualizada o en su defecto derogada por disposiciones más garantistas a la hora de determinar los derechos de los accionantes. Si bien la figura del silencio administrativo apareció en el espectro jurídico cuando se necesitaba, es decir, cuando la arbitrariedad de la administración así lo exigía y se requería de la posibilidad de obligar a la administración a dar respuesta en termino y completa de la petición, hoy por hoy, la figura se encuentra en desuso y lo que hace es eternizar la posibilidad de acceder de manera libre a la administración de justicia puesto que condiciona al usuario al paso prolongado de un término para poder concluir que la contestación de la petición se entiende negada.

Corolario a lo anterior, encontrándonos frente a una figura como la del silencio administrativo de cuya aplicación práctica poco se habla ya, es de exaltarse la aplicación y aplicabilidad de la acción de tutela para la protección de derechos constitucionales como lo es el derecho de petición puesto que, aun cuando ya se percibe, es de recalcar el cambio de modelo constitucional presente en el país ha estado social y democrático de derecho, con primacía en la dignidad humana y los derechos de las personas.



Se itera pues que, la única forma de aplicación práctica y aplicabilidad del silencio administrativo seria la implementación del silencio positivo como regla general para la contestación de peticiones. Su aplicación permitiría dar luz verde al retorno a la vida jurídica de tal figura en garantía de derechos y principios constitucionales, así como una salvaguarda de los principios procesales, así como de las personas a la hora de iniciar procesos judiciales con motivo de actos fictos

Referencias

- Aguilar, A., Correa, M., Puentes, N., Quintero, L., & Verastegui, P. (2011). *Propedeutica Administrativa. Tomo 1*. Pereira: Universidad Libre.
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá.
- Corte Constitucional . (2015). *C 699*. Bogotá.
- Corte Constitucional. (1996). *C 244*. Bogotá.
- Corte Constitucional, C 483 (Corte Constitucional 2008).
- Corte Constitucional. (20 de Octubre de 2010). *Sentencia C -828*. Bogotá.
- Corte Constitucional, T 441 (Corte Constitucional 2013).
- Corte Constitucional. (2013). *T 151* . Bogotá.
- Corte Constitucional, Sentencia T 206 (Corte Constitucional 2018).
- Corte Suprema de Justicia Sala Civil. (2011). *52835-3103-001-2000-00005-01*. Bogotá.
- Daza, F. (2012). *Fundamentos doctrinales y jurisprudenciales del silencio administrativo positivo. Solucion a la inactividad de la administracion*. Bogota: Universidad Militar Nueva Granada.
- GARCÍA de ENTERRÍA, E. (1996). *Democracia, jueces y control de la administración*. Madrid: Civitas.
- Garzon, J. (2008). *La crisis del silencio administrativo negativo*. bogota : Doctrina y Ley.
- Gonzalez, J. (1985). *Derecho Procesal Administrativo*. Madrid: Temis.
- Gonzalez, M. (2007). *Derecho Procesal Administrativo*. Bogota DC: Universidad Libre .
- Huerta, F. (2008). *El Acto Administrativo. Vision Holistica*. Pereira : Universidad Libre.
- Huerta, L. (2004). *El acto ficto* . Madrid.